

doscientas cuerdas en el barrio de las Vegas, á que se refería el expresado documento privado, y pedido este dato al Alcalde de Yauco, remitió un oficio del Juzgado de 1ª Instancia de San German que lleva la fecha de veinte y dos de Julio de mil ochocientos setenta y seis y en el que se hacía constar que el pleito seguido entre Verges y Rodríguez se hallaba pendiente de tramitación desde Julio de mil ochocientos setenta y uno por no gestionarlo ninguna de las partes y en vista de tal antecedente informó la Inspección referida, expresando que en el barrio de las Vegas existían terrenos baldíos que aprovechaban diferentes particulares, si bien no aparecía haberse hecho en ellos cortas recientes; que Arizmendi se creía dueño de los mismos por compra á Don José María Rodríguez, quien afirmaba que le fueron concedidos por la Junta superior de baldíos, sin embargo de no haber adquirido el título de amparo, circunstancia por la que se anuló de hecho la concesión, no pudiendo por tanto cederlos á aquel; que el Gobierno General no debía entrometerse en la reclamación de Arizmendi sobre los comprados á Ayala toda vez que el conocimiento de ello pertenecía á los Tribunales de justicia, proponiendo en su virtud entre otros particulares que el Estado se incautase de dichos terrenos como así se acordó por el Gobierno General en cinco de Octubre de mil ochocientos setenta y seis. — Que elevada esta resolución á efecto en catorce de Diciembre siguiente y acordada la adjudicación de los terrenos baldíos que aparecían cultivados á los individuos que venían disfrutándolos, previo su justiprecio y pago con arreglo á las condiciones establecidas, solicitó en treinta de Abril de mil ochocientos setenta y siete Don Pedro Lázaro Verges, diciéndose dueño de aquellos, que se suspendieran todas las diligencias relativas á su venta hasta que por el Juzgado de San German se fallase su pleito con Rodríguez sobre propiedad de los mismos é informada esta instancia por la Inspección de Montes así como una comunicación dirigida por el Juzgado pidiendo el cotejo de un documento exhibido por Verges en el período de prueba del indicado pleito se resolvió en veinte y ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y siete requerir de inhibición á aquella Autoridad judicial por no corresponderle el conocimiento del asunto como al efecto se le hizo en treinta y uno del propio mes, siendo este el estado que á zó el expediente gubernativo. — Vistas las actuaciones contenciosas de primera instancia de las cuales resulta: — Que el Lcdo. Don Hilario Cuevillas Hernandez, á nombre y con poder en forma de Don Pedro Lázaro Verges, dedujo en veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y siete demanda contenciosa — administrativa contra la Administración, pidiendo la revocación de las providencias que ordenaron la incautación de los terrenos y acompañando con aquella una certificación del título de amparo inscrito á favor de Don Fernando M. Pinatel por ochocientas cuerdas de terreno baldío en el barrio de las Vegas y lugar titulado del *Río Chiquito*, jurisdicción de Yauco, una copia de la escritura de venta de estos terrenos á Don Pedro Mompert, otra certificación del auto aprobatorio del testamento cerrado que este otorgó con cláusula de institución de heredero á favor de Verges, otra del acuerdo de la Junta superior de baldíos, desestimando las citadas pretensiones de Ayala y Fratricillo, otra y un plano de aquellos terrenos y un oficio de la Alcaldía de Ponce, trasladando á Verges lo dispuesto por Gobierno General respecto á la presentación de los títulos de los referidos terrenos. — Que consultado al Gobierno General en veinte y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y ocho, la procedencia de la vía contenciosa no obstante do estar pendiente la contestación al requerimiento que se hizo al Juzgado de San German para que dejara de conocer de pleito entre Verges y Rodríguez y declarada procedente aquella se pusieran de manifiesto las actuaciones para que el actor ampliara su demanda y personado en autos el Licenciado Arabuzu por institución de Don Hilario Cuevillas se le declaró decaído de aquel derecho por no haberlo utilizado en término legal á instancia del demandado. — Que emplazado el Ministerio Fiscal en defensa de la Administración, alegó la excepción dilatoria de litis — pendencia y desestimada esta contestó la demanda pidiendo se declare no haber lugar á proseguirla y absolviéndose de ella á la Administración y dejando expedito su derecho á Verges para que lo ejecutara en cualquiera otra vía que creyese correspondiente. — Que recibido el pleito á prueba propuso la parte actora que el Escribano de Ponce Don Luis Capó expidiera testimonio de la escritura de venta de Don Fernando M. Pinatel á Don Estéban Gallart de las ochocientas cuerdas de terreno objeto de este pleito en ocho de Octubre de mil ochocientos cincuenta y tres, otro de la escritura otorgada ante el Alcalde ordinario de Yauco en treinta y uno de Mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro por lo que Gallart vendió dichas ochocientas cuerdas de tierra á Don Juan Acibiel que el Escribano de San German Don José R. Nizario expidiera testimonio de la sentencia dictada por aquel Juzgado en diez y seis de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho en los autos seguidos entre Verges y Don José M. Arredondo sobre oposición establecida por aquel á que se concedieran á este terrenos de su pertenencia; que los testigos que presentaría declarasen si Pinatel al obtener en mil ochocientos treinta y cuatro los expresados terrenos los puso inmediatamente en cultivo auxiliado por su hermano Don Bartolomé y por los aparceros Felipe y Antonio Ayala y otros, que al vender esa finca Pinatel á Gallart la tenía en regular estado de cultivo que hizo aumentar este y los nuevos compradores Aubert y el Mompert pasando el terreno por muerte de este á Verges, continuando en él los mismos aparceros y pagando las contribuciones que aquellos le poseyeron quieto y pacíficamente por mas de veinte y cinco años; que poseyéndolo Verges en mil ochocientos sesenta fueron pedidos en clase de baldíos por Ayala, Fratricillo y Arredondo; y que el terreno litigado por Verges y los indicados peticionarios es parte integrante de las ochocientas

cuerdas que fueron de Pinatel; que se librara despacho al Alcalde de Yauco para que informara si en los libros había figurado Pinatel como contribuyente por la estancia desde mil ochocientos treinta hasta mil ochocientos cincuenta y cuatro y que tanto Gallart como Aubert, Mompert y Verges siguieron pagando el derecho llamado de tierra y que el Juzgado de San German remitiere testimonio de las providencias dictadas sobre la inhibitoria ya mencionada. — Que declara la pertinente la prueba propuesta se mandó practicarla y habiéndose pedido que se uniera á los autos una parte de ella después de pasado el término probatorio, se acordó devolvérsele al actor quien pidió reforma que le fué denegada y pretextó de nulidad, y se declaró el pleito concluso recayendo previa instrucción de los litigantes, la oportuna sentencia de veinte y cinco de Abril de mil ochocientos setenta y nueve al principio relacionado: — Vistas las actuaciones contenciosas de segunda instancia de las cuales aparece. — Que contra esta sentencia interpuso apelación la parte demandada y admitido el recurso se remitió los autos al Consejo de Estado en el que lo mejoró Mi Fiscal solicitando que se revoque aquella por considerar que ni aún siquiera pudo admitirse la demanda por haberse interpuesto después de los noventa días señalados por la Ley para recurrir en vía contenciosa de las providencias administrativas dictadas por el Gobierno General de la Isla de Puerto-Rico. — Que personado en autos el Lcdo. Don Francisco Pi y Margall á nombre del apelado se le tuvo por parte y concertó el recurso con la pretensión de que se confirme la sentencia impugnada por encontrarla ajustada á las prescripciones legales, tanto de forma como de fondo que rigen en la materia: — Visto el artículo primero del Reglamento de cuatro de Julio de mil ochocientos sesenta y uno para los negocios contenciosos — administrativos de Ultramar que fija el plazo de noventa días para deducir demanda en vía contenciosa contra las providencias de la Administración que causen estado en las provincias de América y de ciento veinte en Filipinas á contar desde aquel en que se hubiere hecho saber al interesado administrativamente la resolución objeto del recurso: — Visto el artículo veinte y tres del propio Reglamento por el que se determina que la litis — pendencia constituye una de las excepciones dilatorias que pueden alegarse antes de concertar la demanda: — Considerando que si bien la providencia administrativa en que se acordó la incautación por el Estado de los terrenos baldíos, objeto de este pleito lleva la fecha de cinco de Octubre de mil ochocientos setenta y seis no aparece que fuera notificada al demandante y la noticia vaga que de ella pudiera tener á juzgar por la instancia de treinta de Abril de mil ochocientos setenta y siete no puede ser motivo bastante para considerarlo enterado de la resolución de un expediente en que no había sido parte y del que no había tenido conocimiento alguno: — Considerando por lo tanto que la fecha en que todo caso pudiera tenerse por notificado el demandante es la del veinte y ocho de Agosto del mismo año, en que indirectamente se desestimó su dicha instancia, resultando por tanto presentada la demanda dentro del plazo señalado por la Ley: — Considerando que si bien es cierto y ha sido reconocido por las partes, que cuando se entabló la demanda se había requerido por la Administración al Juzgado de San German para que se inhibiera del conocimiento del pleito que ante él seguían el demandante y Don José María Rodríguez Arredondo sobre la propiedad de parte de los terrenos que aquí se cuestionan, no es menos evidente que sobre los indicados terrenos como sobre toda finca puede suscitarse controversia de distinta índole y naturaleza como de hecho se observa en el presente caso puesto que la cuestión activa se refiere á si los terrenos deben considerarse del Estado ó del dominio particular y la que pende ante el Juzgado de San German versa sobre á quien de dos particulares corresponde parte de dichos terrenos: — Considerando que siendo como son dos pleitos distintos el presente y el que se sigue en el Juzgado de San German, si bien este último á que alcanza la competencia entablada debe quedar en suspenso por parte de las dos Autoridades contenciosas hasta que aquella se dirima no sucede lo mismo con el de autos en que la Administración tiene su jurisdicción libre y expedita: — Considerando que la materia y el procedimiento de este pleito son pura y exclusivamente administrativas y por consiguiente solo á la Administración activa y contenciosa en sus respectivos casos corresponde conocer del mismo: — Y considerando que la sentencia apelada es legal y recta en el espíritu de sus considerandos y justa y arreglada á derecho en su resolución: — Conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesión á que asistieron: Don Antonio María Fábè, Presidente, Don Tomás Repartillo, Don Félix García Gomez, Don Estandao Suarez Inclán, Don Estéban Garrido, Don José Mugiz, Don Pedro de Matrazo, Don Juan Moreno Benítez, Don Cárlos Varcalcel, Don Antonio García Rizo, Don Alvaro Gil Sanz, Don Pedro Sanchez Mora y Don José Emilio de Santos. — Vengo en confirmar la sentencia apelada del Consejo de Administración de Puerto-Rico de cinco de Octubre de mil ochocientos setenta y seis que queda firme y subsistente; sin que obste para nada respecto á lo que pueda resultar del pleito pendiente ante el Juzgado de San German de aquella Isla — Dado en Palacio á veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos. — ALFONSO. — El Presidente del Consejo de Ministros, PRÁXEDES MATEO SAGASTA. — Publicación — Leído y publicado el anterior Real Decreto por Mi el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere, que se una á los mismos se notifique en forma á las partes, y se inserte en la GACETA, de que certifico: — Madrid, dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos. — ANTONIO ALCÁNTARA. — Y para que conste y hechas ya las debidas notificaciones á las partes, expido la presente, que se remitirá al Gobernador General, Presidente

del Consejo de Administración de la Isla de Puerto-Rico, para los efectos oportunos. — Madrid, diez y ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos. — Antonio Alcántara. — Hay un sello del Consejo de Estado. — Don Rafael Romeu y Aguayo, Secretario del Consejo Contencioso — administrativo de esta Isla. — Certifico: que lo que precede es copia fiel de la que obra en el expediente que ante este Excmo. Consejo siguió Don Pedro Lázaro Verges, contra resolución del Gobierno General sobre reversión al Estado de terrenos baldíos sitos en Yauco. Y para remitir al Excmo. Sr. Gobernador General en cumplimiento de lo dispuesto, libro la presente en Puerto-Rico á once de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos. — Rafael Romeu. — Hay un sello del Consejo Contencioso — administrativo. —

Es copia. — El Secretario del Gobierno General, Ricardo de Cubells. [2137]

CAPITANIA GENERAL

DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

ESTADO MAYOR

SECCION 1ª

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 5 de Abril último, se comunica al Excmo. Sr. Capitán General de esta Isla la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.: — Por el Ministerio de la Gobernación, en 15 de Marzo próximo pasado, se dijo á es e de la Guerra lo que sigue: — Excmo. Sr.: — Por telegrama de esta fecha digo á los Gobernadores de las provincias lo que sigue: — En virtud de una consulta elevada á este Ministerio por los Gobernadores de Albacete y Cuenca, se ha dispuesto que á los mozos procedentes de los reemplazos de 1879, 1880 y 1881 que fueron exceptuados en dichos años y en el actual han sido declarados soldados del Ejército activo, por efecto de revisión, debe aplicárseles la Ley de 25 de Agosto de 1878, en lo relativo á sustitución y redención; surtiendo esta los efectos del párrafo 3º artículo 189. — De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. — De la propia orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.”

Lo que de orden de S. E. se publica en la GACETA OFICIAL de esta Isla para conocimiento de quienes correspondan.

Puerto-Rico, 23 de Mayo de 1882. — El Coronel Jefe de E. M., José de Nicolau. [2109]

SECCION 1ª — JUSTICIA.

Por el Ministerio de la Guerra, con fecha 15 del mes próximo pasado, se comunica á esta Capitanía General la Real orden siguiente:

“Excmo. Sr.: — El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo que sigue: — He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de las acordadas de ese Consejo Supremo de 21 de Diciembre del año próximo pasado y 17 de Enero último, en que se llama la atención de este Ministerio acerca de la conveniencia de que mientras se publica el nuevo Código Militar, se dicte una disposición de carácter general que determine claramente la duración de la pena de extinguir en Presidio ó en Cuerpo de disciplina el tiempo del empeño, esto es, si se ha de considerar cumplida dicha pena al corresponder al reo pasar á la reserva ó ha de entenderse que comprende el período total del servicio Militar, aclarando cual es la penalidad establecida en el artículo 5º de la Real orden de 31 de Agosto de 1872: Vista la Ley de 25 de Agosto de 1878, para el reclutamiento y reemplazo del Ejército, reformada por la de 8 de Enero del año actual, por cuya modificación se establece en la Península en seis años el derecho de actividad en sus situaciones de activo, reserva activa y reclutas disponible, y cuatro en Ultramar: Visto lo dispuesto en el Reglamento de 27 de Diciembre de 1878 para la ejecución de la anterior Ley, y en el de Cuerpos disciplinarios, aprobado en 23 de Febrero de 1880, así como lo prevenido en la Real orden de 13 de Febrero de 1875 y demás referentes al asunto; S. M. se ha servido disponer lo siguiente: — Primero. Se declara que el tiempo del empeño, en cuanto á la duración de la penandad, cuando por sentencias de Consejo de Guerra se imponga á los individuos de la clase de tropa la pena de extinguirlo en Presidio ó en Cuerpo de disciplina, se entienda que es el que comprende la situación de actividad, ó sea hasta que le corresponda pasar á la segunda reserva. — Segundo. Continuará vigente la Real orden de 15 de Mayo de 1856, para el caso en que al sentenciado á la pena expresada en la disposición anterior le falte menos de tres ó dos años de servicio activo respectivamente, según que el delito se calificó de robo ó hurto, los cuales deberá extinguir siempre como tiempo mínimo. — Y tercero. Se declara así mismo subsistente la Real orden de 15 de Diciembre de 1877, respecto al pase con licencia ilimitada y reserva de los individuos de los Cuerpos disciplinarios que se hallen comprendidos en los casos que su artículo 3º determina. — Lo que de Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, traslado á V. E. para su cumplimiento.”

Lo que de orden de S. E. se publica en este PERIÓDICO OFICIAL para su conocimiento y cumplimiento por quienes corresponden.

Puerto-Rico, 20 de Mayo de 1882. — El Coronel Jefe de E. M., José de Nicolau. [2014]